

LA COLUMNA DE...



SERGIO LEHMANN
ECONOMISTA JEFE
DE BCI

Economía y moral

Bien conocido es el trabajo desarrollado por Daron Acemoglu y James A. Robinson, que plasmaron en el libro *Por qué fracasan los países*, publicado en 2012. En él se reconoce que la fortaleza de las instituciones es lo que, en definitiva, determina el éxito de los países en su camino al desarrollo. Pero como sabemos, más allá del marco legal y normativo, las instituciones están conformadas por personas, cuyo comportamiento no siempre sigue parámetros éticos. Cualquier desvío de una conducta responsable y recta lleva de forma irremediable a malas políticas y corrupción, llevando a un deterioro institucional y, por consiguiente, a un menor crecimiento económico.

A nivel global, Transparencia Internacional evalúa desde hace 30 años el nivel de corrupción para los distintos países. Se trata de un índice que va de cero a 100, donde 100 es el nivel de menor corrupción

posible. La evidencia es muy contundente en dar cuenta que aquellos países más exitosos en materia de desarrollo son precisamente los más probos.

Se entiende que bajo un escenario de mayor corrupción se reconoce un uso fraudulento de recursos públicos, menor confianza, mayor incertidumbre y desincentivos para la inversión. En consecuencia, el crecimiento económico se deteriora y el bienestar social avanza más lento.

Encabezando el ranking de la probidad mundial en 2024 vemos a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, marcando un índice en torno a 90. Entre los países más corruptos, reconocemos a Venezuela, Haití, Corea del Norte y Somalia, con cifras bajo 10.

Aunque Chile se posiciona por sobre la media regional y de otras economías emergentes, hemos visto incrementos preocupantes en las cifras de corrupción.

“Cualquier desvío de una conducta responsable y recta lleva de forma irremediable a malas políticas y corrupción, llevando a un deterioro institucional y, por consiguiente, a un menor crecimiento económico”.

Los hechos más recientes, tales como el uso fraudulento de licencias médicas, el desvío de recursos públicos a través de fundaciones o el mal uso de asignaciones en algunos municipios, entre otros, son una potente señal de alerta. Si bien aún nos escandalizamos con estas noticias, vemos que cada vez con mayor frecuen-

cia, son parte de la cobertura habitual de los medios de comunicación, es decir, un reflejo inequívoco del incremento de estos delitos. En 2024, Chile obtuvo una puntuación de 63, lo que representa una caída de 10 puntos respecto al nivel registrado hace una década. Esto ha tenido un impacto relevante en nuestra capacidad de crecimiento, en línea con lo que sugiere la evidencia empírica. Es reflejo de instituciones que han ido perdiendo solidez, abriendo espacios para mayor corrupción.

Aún estamos a tiempo de detener esta tendencia, castigando con dureza los delitos. Requerimos de liderazgos fuertes, que apunten a robustecer las instituciones, reforzando la seguridad jurídica, eliminando espacios de discrecionalidad en los procesos administrativos y dando mayor valor a los fundamentos técnicos. Al mismo tiempo, debemos avanzar rápido en el control de la delincuencia y el narcotráfico.

Las bandas que hoy actúan en nuestro país intentan infiltrarse en las instituciones e instalar la corrupción como parte de sus operaciones. El crecimiento de largo plazo de Chile ya ha sufrido impactos negativos por estos factores, de al menos unas tres décimas del PIB. No permitamos mayores deterioros.